

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 263

MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTALORA

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76147-33-33-002-2019-00244-01
EJECUTANTE:	PEDRO NEL CASTAÑO RESTREPO Y OTROS Apoderada: Laura Mercedes Pulido Salgado correo: notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com
EJECUTADO:	MUNICIPIO DE CARTAGO notificacionesjudiciales@cartago.gov.co
ASUNTO	REVOCA AUTO QUE NEGÓ MANDAMIENTO DE PAGO

I. Publicidad.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020.

En tal virtud:

- I. Se informa a las partes que las actuaciones procesales subsiguientes en este proceso se surtirán conforme a lo dispuesto por el **Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020**, por el cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

Para los efectos del artículo 2 del decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma TEAMS.

Las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente proceso conforme ordena el artículo 3 del decreto 806. **En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.**

II. OBJETO DE LA DECISION

La sala decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio que negó el mandamiento de pago por acumular varias demandas ejecutivas contra la misma entidad ejecutada.

III. ANTECEDENTES

La apoderada judicial de veintitrés interesados, presentó demanda ejecutiva contra el MUNICIPIO DE CARTAGO, solicitando librar mandamiento de pago con la finalidad de obtener el pago de las sumas de dinero reconocidas en sentencias condenatorias para cada uno de ellos, proferidas por extintos Juzgados de Descongestión del Circuito de Cartago y confirmadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

IV. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 1847 del 29 de agosto de 2019 el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago negó el mandamiento de pago.

Consideró que la demanda contiene una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que tratándose de demandas ejecutivas, la acumulación de pretensiones solo procede si los demandantes persiguen los mismos bienes del demandado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 88 del CGP.

Indicó que conforme a la regulación sobre acumulación de demandas y procesos ejecutivos contenida en los artículos 464 y 465 del CGP, el objeto es que todos los acreedores puedan concurrir a un mismo proceso ejecutivo para hacer valer su crédito, que será pagado producto del remate de los bienes embargados, por tanto, como los bienes perseguidos por los ejecutantes son sumas de dinero, no habría lugar a remate alguno.

Concluyó señalando que tampoco se configuró ninguna de las causales previstas en el inciso 3 del artículo 88 del CGP para que proceda la acumulación subjetiva de pretensiones y negó el mandamiento de pago solicitado.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Inconforme con la decisión, la apoderada común de los ejecutantes presentó recurso de apelación. Argumentó en síntesis que le asistió razón al despacho cuando indicó que las pretensiones de las demandas ejecutivas no eran susceptibles de ser acumuladas por derivarse de obligaciones surgidas de providencias judiciales proferidas por diferentes juzgados y en instancias distintas, lo que impediría que ese despacho pudiera conocer del asunto. Para el efecto se refirió a la providencia del 25 de julio de 2016 proferida por el Consejo de Estado donde se dispuso que el juez de conocimiento debe ser el mismo de la ejecución.

Empero, pidió remitir las actuaciones a quien se considere competente, para lo cual suministraría el número del despacho que profirió la sentencia base de ejecución.

VI. CONSIDERACIONES

1.1 Problema Jurídico

El asunto que se discute se contrae a establecer si es procedente negar el mandamiento de pago por indebida acumulación de pretensiones, o en su lugar se debe ordenar a la apoderada de la parte actora que subsane la demanda separando las pretensiones.

1.2 Tesis

La Sala revocará la providencia recurrida, porque si bien le asiste razón al juez de instancia para declarar la indebida acumulación de pretensiones conforme al artículo 88 del CGP, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos formales el juez deberá inadmitirla para que dentro del plazo de cinco (05) días sea subsanada¹, en este caso mediante la presentación de demandas separadas.

Para resolver el problema jurídico, se abordará: **i)** los requisitos formales y sustanciales para librar mandamiento de pago, **ii)** la inadmisión en el proceso ejecutivo por falta de requisitos formales de la demanda y, **iii)** el caso concreto.

- **Del título ejecutivo y los requisitos para librar mandamiento de pago:**

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

Para que sea viable librar mandamiento de pago, el juez de ejecución está obligado a estudiar los documentos aportados con la demanda a efectos de establecer jurisdicción, competencia y, que las obligaciones reclamadas sean expresas, claras y exigibles. Igualmente se debe analizar lo relativo a la validez probatoria de los documentos aportados conforme a las reglas del CGP.

El artículo 422 del CGP¹ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del

¹ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben

deudor o de su causante; **(ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial**; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

En cuanto a los requisitos formales, el artículo 430 del CGP dispone que *“los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso*. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declarar por el juez en la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución, según sea el caso.

Respecto a la forma de hacer valer la ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo, la doctrina² ha dicho: *“Se trata de un punto de especial interés debido a que de forma precisa se delimitan dos campos de acción en lo que con la defensa del ejecutado concierne; el primero de ellos se refiere a los requisitos formales del título ejecutivo, es decir todo lo que atañe con la observancia de las exigencias previstas en el art. 422 del CGP. El segundo es el atinente con la defensa de fondo del demandado, o sea el cuestionamiento de la existencia total o parcial de la obligación por la cual se le ejecuta, lo que en la práctica es usual confundir y no es extraño observar que el abogado de la parte ejecutada emplea la excepción “perentoria” de inexistencia de los requisitos formales del título, ejemplo, porque la obligación no es clara, no proviene del demandado o no es exigible, lo que es un error debida a que aquí no se cuestiona la obligación en sí, si no la idoneidad del título ejecutivo”*.

Por otra parte, el Consejo de Estado – Sección Cuarta, en providencia del 31 de mayo de 2018, C.P. JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, recordó cuales son los requisitos sustanciales y formales del título ejecutivo:

liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

² López Blanco Hernán Fabio, “Código General del Proceso - parte especial, pág. 426. Dupre editores Ltda.2018.

*“De conformidad con la jurisprudencia de esa Corporación, los requisitos sustanciales del título ejecutivo son aquellas que tienden a demostrar que las obligaciones contenidas en los documentos son claras, expresas y exigibles. Por lo tanto, si la excepción se declaró probada porque el título base de recaudo no daba cuenta de obligaciones claras y exigibles, es evidente que el pronunciamiento de la autoridad judicial demandada versó sobre los **requisitos sustanciales** del título ejecutivo.*

*Siendo así, el tribunal no desconoció el artículo 430 del Código General del Proceso, pues esa norma prohíbe pronunciarse sobre los **requisitos formales, que están relacionados con la autenticidad y el origen de los documentos**, que pretendan hacerse valer como título ejecutivo. Si se analiza la providencia judicial cuestionada, se concluye que, para declarar probada la excepción, el tribunal no hizo un análisis de ese tipo.*

Así mismo, la Sección Tercera – Subsección B, C.P: RAMIRO PAZOS GUERRERO, en providencia del 22 de julio de 2019³, afirmó:

“- Las características del título ejecutivo

1. El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil señala que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él.

2. En ese contexto, la obligación contenida en el título ejecutivo debe aparecer manifiesta en la redacción misma del título, esto es, el crédito - deuda debe estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones, por lo que la obligación debe estar determinada, ser fácilmente inteligible, entenderse en un solo sentido y no estar pendiente de un plazo o condición.

3. De otra parte, el título ejecutivo puede ser: i) singular cuando la obligación esta contenida o constituida por un solo documento, o ii) puede ser compleja cuando se encuentra integrada por un conjunto de documentos, por ejemplo, un contrato, junto con los certificados de disponibilidad presupuestal, las actas recibo de las obras, servicios o bienes contratados y el acta de liquidación, etc.

4. Ahora, cuando el título sea complejo, se deben valorar en conjunto la totalidad de los documentos allegados junto con la demanda⁴, con miras a establecer si constituyen prueba idónea de la existencia de una obligación a favor del ejecutante.

***5. En cuanto a los requisitos formales, al tenor del precitado artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el título ejecutivo debe estar contenido en documentos que den cuenta de la existencia de la obligación, los cuales deben ser auténticos y emanar del deudor o de su causante**, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, de conformidad con la ley.*

6. En estas circunstancias, pueden ejecutarse las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que se encuentren contenidas en un único documento

³ radicación número: 23001-23-31-000-2009-00277-02 (60613)

⁴ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta. Sentencia del 26 de febrero de 2014, dentro del expediente con radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-01(19250). Consejero ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

—título ejecutivo singular- o aquellas que obren en varios de ellos —título ejecutivo complejo-, dichos documentos deben ser auténticos y emanar del deudor o de una providencia judicial.

En cuanto a los requisitos sustanciales, el Consejo de Estado en providencia del 26 de febrero de 2014, había manifestado:⁵

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁶:

“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,⁷ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.”⁸

Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

- **Precisiones sobre la inadmisión en el proceso ejecutivo por falta de requisitos formales de la demanda:**

⁵ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁶ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

⁷ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

⁸ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

El Consejo de Estado, Sección Tercera⁹ considera posible inadmitir la demanda ejecutiva para la corrección de los defectos formales, en los siguientes términos:

“La Sala ha sostenido que en los procesos ejecutivos no es posible la inadmisión de la demanda para su corrección. En auto del 12 de julio de 2001, Expediente No. 2028, la Sala manifestó lo siguiente:

“En el proceso ejecutivo, a diferencia de los juicios de cognición, la ley enseña que si la demanda y sus anexos son aptos, siempre y cuando exista jurisdicción, se libraré mandamiento de pago y si no se negará el mandamus; este es el sentido del artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, pues, expresa que presentada la demanda y acompañada del documento (s) que preste mérito ejecutivo, el juez libraré mandamiento ordenando al demandado para que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal. (...)

En el juicio ejecutivo, el juez carece de competencia para requerir a quien se considera acreedor y a quien éste considera deudor para que allegue el documento (s) que constituye el “título ejecutivo”; es al ejecutante a quien le corresponde y de entrada demostrar su condición de acreedor; no es posible como si ocurre en los juicios de cognición que dentro del juicio se pruebe el derecho subjetivo afirmado definitivamente en el memorial de demanda”.

*Así las cosas, en los procesos ejecutivos el juez no puede inadmitir la demanda y ordenar al ejecutante corregirla, por ejemplo, aportando los documentos necesarios para configurar el título ejecutivo. **No obstante, lo anterior, la Sala considera pertinente reiterar que, en el proceso ejecutivo, si bien no es posible inadmitir la demanda para que el ejecutante complete el título presentado, sí lo es para que se corrijan los requisitos formales establecidos en el art. 85 del C.P.C.***

En el proceso ejecutivo nada se prevé sobre este trámite, razón por la cual es necesario remitirse a las disposiciones generales del estatuto procesal civil.

Sobre el punto, la doctrina ha afirmado lo siguiente:

“Así, por ejemplo, si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos formales o el demandante no adjunta uno de los anexos obligatorios de toda demanda (por ejemplo, la prueba de la existencia y de la representación de la sociedad demandante o de la calidad de heredero en que se cita a una de las partes o copia de la demanda y de sus anexos para el demandado), el juez puede inadmitirla para que se dé cumplimiento a los requisitos que exige la ley. De no hacerse así en el plazo de cinco días, entonces el juez proferirá un auto negando el mandamiento ejecutivo, lo que equivale a rechazar la demanda”¹⁰.

*En providencia del 16 de junio de 2005¹¹, **esta Sala acogió la tesis doctrinal según la cual es posible corregir los defectos formales de la demanda pues, lo contrario, implica una rigidez que carece de sustento legal y que se encontraría en contravía del principio constitucional de primacía de la sustancia sobre la forma. De igual manera, implicaría una vulneración del derecho de acceso a la Administración de Justicia, pues, con argumentos***

⁹ C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, en sentencia del 11/10/2006, Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00993-01(30566)

¹⁰ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Procedimiento Civil, Parte Especial”, Tomo II, Editorial Dupré, (Bogotá – 2004), pág. 450.

¹¹ Sección Tercera, Exp. 29238. M.P.: Alier Hernández E.

meramente formales, se impediría la puesta en marcha del aparato judicial.

*Lo anterior no obsta para que la Sala reitere su posición según la **cual no puede el juez de la demanda ejecutiva, en cualquier caso, inadmitirla con el propósito de permitir al demandante completar, adicionar o mejorar o, en general, variar el título ejecutivo presentado ab initio de modo insuficiente.** (negrillas y subrayas por fuera de texto).*

La doctrina¹² igualmente ha considerado, que solamente en los casos en que no se reúnen los requisitos formales de la demanda es correcto inadmitirla para que se suplan dichas falencias:

*“Queda así claramente establecido que en el proceso ejecutivo el juez debe aplicar las disposiciones que le permiten inadmitir o rechazar una demanda. Si bien es cierto que el mandamiento ejecutivo no es estrictamente un auto admisorio de la demanda, más por razones de recalcitrante ortodoxia procesal que por motivos prácticos, pues no existe ninguna razón valedera para establecer la diferencia, dentro de la estructura de este proceso es su equivalente; por ello esas **normas generales tienen plena cabida en este proceso especial**, aspecto que reafirma el art. 430 del CGP, al señalar que “Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuera procedente, o en la que aquel considere legal”.*

*Así, por ejemplo, **si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos formales o el demandante no adjunta uno de los anexos obligatorios de toda demanda, el juez puede inadmitirla para que se dé cumplimiento a los requisitos que exige la ley.** De no hacerse así en el plazo de cinco días, entonces el juez proferirá un auto negando el mandamiento ejecutivo, lo que equivale a rechazar la demanda.*

***Se debe combatir la tesis según la cual el art. 90 del CGP no es aplicable al proceso de ejecución en cualquiera de sus formas y que lo que procede siempre que no se reúnen alguno de los requisitos formales de la demanda es negar de plano su proferimiento.** Quienes la defienden acuden, con criterio exegético, a soluciones facilistas para deshacerse rápidamente de los expedientes, sin reparar en que esas demandas se presentarán de nuevo al reparto, y que, de otra parte, se cercena el legítimo derecho que asiste al demandante para que se le otorgue la posibilidad de corregir los errores procedimentales que el juez observe, como sucede en los restantes proceso.*

***Quede entonces claro que en el proceso ejecutivo al analizar la demanda el juez debe controlar que éste reúna todos los requisitos que exigen los arts. 82, 83, 84, 85, 88 y 89 del CGP.** Sí así fuere y además se anexa título ejecutivo, en vez de dictar auto admisorio de la demanda proferirá el denominado mandamiento o mandamiento ejecutivo que es su equivalente.*

1.3 Caso Concreto:

¹² LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, PARTE ESPECIAL”, Editorial Dupré (Bogotá 2018) pág. 425

De conformidad con el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de los ejecutantes, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en él.

Consideró la parte recurrente que le asiste razón al juez de instancia al señalar que las pretensiones de las demandas ejecutivas no son susceptibles de ser acumuladas porque derivan de obligaciones contenidas en providencias judiciales proferidas por diferentes juzgados y en diversas instancias porque la ejecución corresponde al juez que las dictó, pero pidió no negar el mandamiento de pago sino remitir las actuaciones que no le correspondan a quien considere competente.

En los procesos ejecutivos, para que sea viable librar mandamiento de pago, el juez de ejecución está obligado a estudiar los documentos aportados con la demanda a efectos de establecer jurisdicción, competencia y, que las obligaciones reclamadas sean expresas, claras y exigibles.

De otra parte, tenemos que el Consejo de Estado¹³ ha destacado la importancia del factor conexidad en materia de distribución de competencias establecidas en la Ley 1437 de 2011, especialmente para la ejecución de la sentencia base de recaudo, que deja en cabeza del juez que profirió la decisión dentro del proceso ordinario.

Por tanto, bajo ese aspecto es cierto que el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago carecería de competencia para conocer de algunas de las demandas ejecutivas debido a que estas tienen origen en procesos ordinarios tramitados por distintos despachos judiciales.

En consecuencia, es evidente que existe una indebida acumulación de pretensiones, sin embargo, tal situación no da lugar a negar de plano el mandamiento de pago.

En los procesos ejecutivos, al igual que en los procesos ordinarios, el juez debe verificar que la demanda cumpla con los requisitos formales exigidos, entre los que se encuentra la debida acumulación de pretensiones y, en caso de que la demanda no los reúna, la ausencia no puede constituir causal de rechazo para el proceso ordinario, ni en negativa de mandamiento de pago en el proceso ejecutivo; el defecto formal da lugar a la inadmisión, con el fin de que se corrija dentro del plazo indicado so pena del rechazo.

Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que la demanda presenta el defecto formal por indebida acumulación de pretensiones, que advirtió el a quo, que podría ser subsanada mediante la presentación de demandas separadas, pues

¹³ Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto interlocutorio I.J. O-001-2016. CP. William Hernández Gómez. Radicación: 11001-03-25-000-2014-01534 00 (4935-2014) del 25 de julio de 2016.

como bien lo señaló la providencia recurrida, las sentencias que se pretenden ejecutar no provienen del mismo despacho.

Ahora, en el caso concreto, de la revisión realizada a la foliatura se observa que las sentencias que se pretenden ejecutar dentro de los veintitrés procesos ordinarios, fueron proferidas por los Juzgados Primero y Segundo Administrativos de Descongestión del Circuito de Cartago **que ya no existen**, por lo tanto, en atención a lo establecido en los Acuerdos PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015¹⁴, Acuerdo PSAA15-10412 del 26 de noviembre de 2015¹⁵ del Consejo Superior de la Judicatura y la Circular CSJVC15-145 del 07 de diciembre de 2015¹⁶ de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la judicatura del Valle del Cauca, le correspondería al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago la competencia para conocer de todos ellos.

Empero, este tribunal, en providencia de sala plena determinó por razones de equidad y eficiencia en la administración de justicia, en eventos como el presente los procesos se sometan a reparto entre todos los despachos judiciales, para no congestionar a uno¹⁷.

Por todo lo anterior, se revocará el auto interlocutorio por medio del cual el juez negó el mandamiento de pago por indebida acumulación de pretensiones, para que, en su lugar, inadmita la demanda con el fin de que en el término legal la

¹⁴ ACUERDO No. PSAA15-10402 Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional". ARTÍCULO 92.- Creación de Juzgados Administrativos. Crear en los siguientes Distritos Judiciales Administrativos, los despachos que se enuncian a continuación: 16. Un (1) Juzgado Administrativo en Cartago, Distrito Judicial Administrativo del Valle del Cauca, conformado por Juez, un (1) cargo de Secretario, dos (2) cargos de Profesional Universitario grado 16, dos (2) cargos de Sustanciador y un (1) cargo de Citador.

¹⁵ ACUERDO No. PSAA15-10412 Por el cual se modifica y ajusta el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015"

¹⁶ **CIRCULAR CSJVC15-145** – Distribución de procesos, (...) Conforme con lo anterior y en aplicación a las directrices del Acuerdo PSAA15-10414, artículo 3, **los procesos a cargo de los despachos de descongestión se entregarán a los despachos permanentes creados, conservando el mismo inventario final** (...)

¹⁷ TAVC, auto Sala Plena del 26/7/2017, exp. 2017-00089-01, M.P. Fernando Augusto García

Muñoz. En el evento de que el Despacho que profirió la sentencia de condena haya desaparecido, la competencia necesariamente recaerá en el Juzgado que corresponda de acuerdo con la redistribución o reasignación que se haya dispuesto de los asuntos que este conocía, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura.

Pero atendiendo a criterios de justicia; en procura de lograr una redistribución equitativa de los procesos entre los jueces de este distrito judicial y; en aras de evitar una congestión innecesaria de sólo dos despachos, lo cual iría en detrimento de la eficacia y celeridad que demandan las partes en la resolución de sus controversias judiciales, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entiende que al margen de quién haya dictado la sentencia, será competente el juez al que inicialmente le fue asignado el asunto, pues fue aquél y no otro el auténtico juez del conocimiento, en claro respeto y acatamiento de la regla o el factor de conexidad en materia de competencia.

apoderada recurrente la subsane, separando las pretensiones por cada sentencia base de recaudo, y las remita a la oficina de reparto para su distribución equitativa entre los juzgados administrativos de Cartago.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO.- APLICAR al proceso las disposiciones del Decreto Legislativo 806 de 2020 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO.- REVOCAR el auto interlocutorio No. 1847 del 29 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago, que negó el mandamiento de pago solicitado, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar:

TERCERO.- ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago, que inadmita la demanda para que, en el término de ley, la apoderada recurrente separe las demandas por cada sentencia base de recaudo y las remita a la oficina de reparto para su distribución equitativa entre los juzgados administrativos de Cartago.

CUARTO.- Notificada y ejecutoriada la presente decisión, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de Origen, para lo de su competencia, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia¹⁸.

Providencia discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada




ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada

¹⁸ VoBo Secretario
Proyectó Andrés M.

Radicación : 76147-33-33-002-2019-00244-01
Acción : EJECUTIVO
Ejecutante : PEDRO NEL CASTAÑO RESTREPO Y OTROS
Ejecutado : MUNICIPIO DE CARTAGO




VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado